



Ministro de Economía

RESOLUCION No. 857

MINISTERIO DE ECONOMÍA: San Salvador, a las ocho horas con diez minutos del día seis de diciembre de dos mil dieciséis.

Visto el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Marcial Antonio Pineda Zamora, en su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA**, del domicilio y departamento de Sonsonate, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] con Número de Identificación

Tributaria: [REDACTED]

[REDACTED] en contra de la Resolución número 106 emitida por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, que condenó al pago de una multa de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,660.00) por haber violentado el artículo 16 de la Ley de Minería.

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS:

- I. Que en Resolución número 106 emitida por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, en esta ciudad, a las catorce horas con treinta minutos del día trece de abril de este año, se impuso al señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA** una multa por la cantidad de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,660.00)**, por incumplimiento al artículo 16 de la Ley de Minería.
- II. Que no estando conforme el señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA** con la anterior Resolución, su Apoderado Licenciado Marcial Antonio Pineda interpuso el Recurso de Apelación ante el señor Ministro de esta Secretaría de Estado, presentado el día dos de mayo de este año, el cual le fue admitido el día siguiente por auto de las ocho horas y en el cual manifestó: 1) Que según el artículo 20 del Código Procesal Civil y Mercantil, se regula la aplicación supletoria de dicho cuerpo legal, ya que en defecto de disposición específica en las leyes que regulan procesos distintos del civil y mercantil, las normas de tal código se aplicarán supletoriamente. En esa vía, conforme al artículo 509, parte primera del precitado Código: *"Las resoluciones definitivas recurridas en apelación no serán ejecutadas..."*; por tanto, la obligación del pago de los veinticuatro mil seiscientos sesenta dólares de los



Ministro de Economía

Estados Unidos de América, no puede exigirse en tanto exista decisión pendiente por parte de la autoridad ad quem. Queda en suspenso el pago dentro del plazo que se detalla en el ordinal segundo de la Resolución. **2)** Que se advierte en la Resolución la impropiedad en cuanto a que la Dirección de Hidrocarburos y Minas recibe denuncias vía telefónica de personas que son afectadas por la realización de actividades de extracción de materiales pétreos de forma legal e ilegal lo cual es ilógico, pues mediante la recepción de denuncias por vía telefónica no existe seguridad de la identidad de la persona que denuncia, tampoco no hay comprobación alguna de la afectación. **3)** En cuanto a la no determinación del volumen de extracción, no fue su mandante quien no hizo mención de ello sino que el mismo Director de Hidrocarburos y Minas en el auto de inicio del procedimiento, pretendiendo trasladar la responsabilidad por un pronunciamiento que su poderdante no ha efectuado, comprobándose además que tal funcionario faltó a su deber de probar tal afirmación por él sostenida inobservando los artículos 7 inciso segundo y 312 del Código Procesal Civil y Mercantil. **4)** Que la Dirección de Hidrocarburos y Minas en ningún momento estableció argumento en el auto de inicio del procedimiento como para tener certeza que la presunta actividad ilegal derivaba de consultas efectuadas al Registro, de las que se hubiere desprendido la ilegalidad por no aparecer registrado; una cosa es referirse a una pretendida extracción ilegal y otra es hacer sabedora a la persona de la referencia y datos de la consulta, como son la fecha realizada, el resultado, tipo de libro consultado, el funcionario que evacuó la consulta, situaciones que en ningún momento fueron acreditadas en dicho auto. El argumento de la actividad ilegal fue manejado al interior de la Dirección de Hidrocarburos y Minas y no puesto en conocimiento del indiciado y si en la Resolución es la precitada Dirección la que arguye el no haber aportado medio probatorio por su mandante, tampoco su titular singularizó el aparente medio probatorio ni especificó el contenido de los Registros, faltando a la exigencia contenida en el artículo 317, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. **5)** Que el Director ha manifestado en su Resolución que: "La Ley ordena sancionar a quien se encontrare realizando actividades mineras, sin la respectiva licencia de concesión..."; pero ¿Dónde aparece que los delegados de la Dirección de Hidrocarburos y Minas encontraron efectiva, real y personalmente al señor **TOBAR MIRANDA** ejecutando extracción de tierra blanca?; ¿Por qué tales delegados fijaron su postura sobre una extracción ilegal por el dicho de un sujeto cuya identidad no consta? **6)** Que según la Dirección de Hidrocarburos y Minas las fotografías no han sido propuestas



Ministro de Economía.

como medios de prueba, siendo que en el mismo renglón donde se encuentra tal afirmación dice que son pruebas tomadas al momento de la inspección que demuestran el estado del lugar y la magnitud de la extracción. 7) Que en toda la Resolución que impugna no aparece la cita de ninguna disposición legal o artículo que de basamento legal a la decisión mencionándose solo el artículo 16 de la Ley de Minería. 8) Que el Director de Hidrocarburos y Minas, no tiene la facultad legal para imponer una multa sobre la base de un salario mínimo inexistente. La Ley de Minería si bien regula la potestad de imponer sanciones pecuniarias, lo hace sobre una incerteza pues el artículo 69-A señala que las infracciones se sancionarán con salarios mínimos diarios urbanos vigentes para la ciudad de San Salvador. El salario mínimo urbano vigente para la ciudad de San Salvador al que se refiere la Ley de Minería no tiene asidero legal; y ni el Director de Hidrocarburos y Minas ni el Ministro de esta Secretaría de Estado pueden arrogarse la potestad de equiparar el salario mínimo urbano vigente para la ciudad de San Salvador al rubro del salario mínimo del rubro industria.

- III. Por auto de las catorce horas con diez minutos del día diecisiete de agosto de este año y notificado el día dieciséis de septiembre del mismo año, se le concedió audiencia al señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA** quien en virtud de escrito presentado por su Apoderado el día veintiuno del precitado mes, manifestó ratificar las imprecisiones y quebrantamiento del procedimiento administrativo sancionador llevadas a cabo, agregando las siguientes: a) Que hubo un quebrantamiento en la prueba para mejor proveer pues su mandante nunca fue convocado, vulnerando así la igualdad procesal. b) Que no existen en la pieza principal informes de la Dirección de Hidrocarburos y Minas o del Registro, ni Acta levantada por la Policía Nacional Civil (PNC) que refiera a la continuidad de la aparente extracción ilegal, por lo cual no es necesario abrir el trámite a prueba. c) Que la precitada inspección se realizó en un inmueble que no era propiedad de su mandante, sino que pertenece a la señora Rosa Amélica Valencia, situado aproximadamente a trescientos metros del inmueble que pertenece al señor **TOBAR MIRANDA**; por lo tanto, tal inspección no fue un medio idóneo que haya permitido recabar insumos para imputar responsabilidad a su poderdante.
- IV. Por auto de las siete horas con treinta y cinco minutos del día cuatro de octubre de este año, se ordenó abrir a pruebas por el término de ocho días hábiles, notificado el día veinte del



Ministro de Economía

mismo mes. Por medio de escrito presentado el día uno de noviembre del precitado año el señor **TOBAR MIRANDA**, a través de su Apoderado, presentó escrito mediante el cual manifestó además de los argumentos contenidos en el escrito de interposición del Recurso de Apelación los siguientes: **a)** Que el Señor Director de Hidrocarburos y Minas falló en el ordinal cuarto de la Resolución número 106 que se practicarán inspecciones periódicas a fin de comprobar el incumplimiento a lo dispuesto en ella; al no haber informes de inspección ni actas que atiendan dicho imperativo, habiendo falta de elementos de convicción para ratificar la sanción pecuniaria. **b)** Que existe incongruencia de las coordenadas referidas en el Acta de inspección, auto de inicio de procedimiento y Resolución 106 por el establecimiento de tres coordenadas para un mismo sitio, como también incongruencias de la inspección para mejor proveer pues no es cierto que se haya llevado a cabo en terreno del señor **TOBAR MIRANDA** pues las coordenadas que contiene el Informe Técnico anexado como pruebas, son distintas a del inmueble objeto de la presunta extracción. Anexó al escrito presentado las siguientes pruebas: **a)** Informe sobre análisis de autos y Acta emitidos por la Dirección de Hidrocarburos y Minas por supuesta extracción de material de tierra blanca (puzolana), junto con mapa de ubicación de puntos, elaborado por el Ingeniero Hugo Nelson Aparicio Colocho. **b)** Ejemplar del auto de las quince horas con treinta minutos del día nueve de marzo de dos mil once, del proceso de inconstitucionalidad 5-2011, que contiene valoraciones sobre la defectuosa regulación legal, aplicable al presente caso.

- V. Que después de analizadas las diligencias y alegatos presentados, este Ministerio estima conveniente hacer las siguientes observaciones: **1)** En lo referente a que el artículo 509, parte primera del Código Procesal Civil y Mercantil señala que: "*Las resoluciones definitivas recurridas en apelación no serán ejecutadas...*"; cabe acotar que la Resolución 106 que sancionó al señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA** al pago de veinticuatro mil seiscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (\$24,660.00) y la cual es objeto del recurso de Apelación no ha sido ejecutada, por existir una decisión pendiente de la Autoridad a la cual ha sido sometido el conocimiento del este Recurso de Apelación, quedando en suspenso el pago de dicha cantidad hasta que exista Resolución de este medio de impugnación. **2)** En lo relativo a que en la recepción de denuncias por vía telefónica no existe seguridad de la identidad de la persona que denuncia, y que no hay



Ministro de Economía

comprobación alguna de la afectación, el artículo 6 de la Ley de Minería letra "i)" establece que es una atribución de la Dirección de Hidrocarburos y Minas velar por la correcta aplicación de dicha normativa y de su Reglamento, y en el artículo 51 del Reglamento de la precitada Ley se señala que: *"Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar por escrito ante la Dirección cualquier hecho que constituya una infracción a la Ley o que resultare perjudicada por una contravención a la misma; en este caso la Dirección procederá a instruir el informativo correspondiente, abriendo un expediente para cada caso. Lo mismo hará cuando por cualquier medio tuviere conocimiento de violaciones a la Ley, en cuyo caso ordenará de oficio que inicie el proceso correspondiente."* En virtud de estos artículos la Dirección de Hidrocarburos y Minas tiene la facultad de indagar in situ sobre los hechos puestos a su conocimiento, y fue la inspección realizada la base con la que se levantó la respectiva Acta de inspección para el inicio del correspondiente proceso sancionatorio, no habiendo sido la denuncia sino la inspección la que constató la existencia de extracción de material en el lugar señalado en el Acta, por lo que si aquella fue realizada vía telefónica o por otro medio como expresa el precitado artículo no es relevante. **3)** En cuanto a la no determinación del volumen de extracción por parte de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, en el auto de inicio se hace mención que *"...iniciada la inspección se observó una pala mecánica realizando actividades de carga y corte de material a los camiones..."*, tal actividad al no contar con la autorización de la Dirección antes referida, es ilegal; en consecuencia, la ilegalidad no depende de la falta de señalamiento del volumen de material extraído, sino de la falta de autorización para realizar tales actividades de carga y corte de material. **4)** En cuanto a que la Dirección de Hidrocarburos y Minas en ningún momento estableció argumento en el auto de inicio del procedimiento que la presunta actividad ilegal derivaba de consultas efectuadas al Registro, de las que se hubiere desprendido la ilegalidad por no aparecer registrado, cabe mencionar que de conformidad al artículo 6 letra "e)" de la Ley de Minería, la Dirección de Hidrocarburos y Minas tiene la atribución de: *"Llevar un Registro de licencias y concesiones otorgadas, así como los demás documentos que guardan relación con las mismas..."*, es precisamente porque dicha Dirección es la facultada para llevar tal Registro, que aseveró en el Auto de inicio que el área inspeccionada no cuenta con la concesión otorgada por este Ministerio; por otro lado, el Apoderado del señor **TOBAR MIRANDA** arguye que en la Resolución 106 la precitada Dirección se lo hizo del conocimiento de su mandante mediante una aclaración; sin embargo, el Apoderado al



Ministro de Economía.

aportar pruebas en la primera instancia tampoco presentó constancia de Registro con la cual habría comprobado que estaba autorizado por la Dirección de Hidrocarburos y Minas para la explotación de tal área. 5) Referente a que los delegados de la Dirección de Hidrocarburos y Minas no encontraron efectiva, real y personalmente al señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA** ejecutando extracción de tierra blanca, cabe señalar que en el Acta número 0346 quedó establecido que al realizar la inspección fueron atendidos por el encargado de la vigilancia de las máquinas, el señor de nombre "Juan Antonio", quien manifestó que el dueño del inmueble donde se realizaba la extracción era el señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA**, por lo cual se inició el proceso en su contra; sin embargo, al examinar las pruebas incorporadas al proceso, se puede establecer que no se logró corroborar la identidad de la persona que brindó la información, pues no consta que haya exhibido su Documento Único de Identidad; además, no se determinó el vínculo laboral entre el señor "Juan Antonio" y el señor **TOBAR MIRANDA** pues aquel no mostró algún documento que acreditara este vínculo, por lo que únicamente se contó con el dicho de esta persona. En consecuencia, al no lograr establecerse que la persona estuviera laborando por órdenes del señor **TOBAR MIRANDA** en el lugar en que encontraron realizando labores de explotación, no resulta posible atribuir a este último la responsabilidad del hecho y por consiguiente una sanción, ello conforme al razonamiento ocupado en un caso similar por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia número 415-2011 de las doce horas con cuatro minutos del día diez de agosto de este año, en el sentido que al no lograr establecer las identidades ni el vínculo laboral de las personas que trabajaban en el lugar de explotación de material pétreo, ni que lo estuvieran haciendo por órdenes del Administrado señalado de cometer el ilícito, no se le pudo responsabilizar y por ende sancionar, declarándose ilegales los actos administrativos que para ese caso eran reclamados. 6) En cuanto a que la Dirección de Hidrocarburos y Minas no propuso las fotografías como medios de prueba, siendo que en el mismo renglón donde se encuentra ésta afirmación, dice que son pruebas tomadas al momento de la inspección, al respecto la Dirección de Hidrocarburos y Minas señaló claramente en la Resolución número 106 que las fotografías son pruebas tomadas al momento de realizarse la inspección, para demostrar con ellas el estado del lugar y la magnitud de la extracción ilegal en imágenes, no existiendo por lo tanto, ambigüedad en tal aseveración. 7) Que en toda la Resolución que impugna no aparece la cita de ninguna disposición legal o artículo que de basamento legal a la decisión



Ministro de Economía.

mencionándose solo el artículo 16 de la Ley de Minería, al respecto la Dirección de Hidrocarburos y Minas en su Resolución número 106 al imponer al señor **TOBAR MIRANDA** la sanción por la comisión de la infracción al artículo 16 de la Ley de Minería lo hizo conforme a lo establecido en los artículos 1, 3, 6 letra "g)", 16, 69 inciso tercero letra "a)", 69-A y 70 de la precitada Ley; en consecuencia, en la Resolución antes mencionada si aparecen citadas disposiciones legales que sirven de fundamento para la imposición de la multa. 8) Referente a que el salario mínimo urbano vigente para la ciudad de San Salvador al que se refiere la Ley de Minería no tiene asidero legal; y ni el Director de Hidrocarburos y Minas ni el Ministro de esta Secretaría de Estado pueden arrogarse la potestad de equiparar el salario mínimo urbano vigente para la ciudad de San Salvador al rubro del salario mínimo del rubro industria, al respecto la sentencia citada por el Apoderado del señor **TOBAR MIRANDA** hace referencia a la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, la cual efectúa un reenvío a una especie de salario que no aparece regulado en el Decreto Ejecutivo número 83 del día veintitrés de agosto del año dos mil seis, publicado en el Diario Oficial número 156, tomo 372 del día veinticuatro del precitado mes, esto con el fin de establecer una analogía con lo establecido en la Ley de Minería y en consecuencia no se aplique la sanción a su representado; sin embargo, mientras el artículo 69-A de la precitada Ley no sea declarado inconstitucional continúan siendo aplicables las sanciones en ella contenidas; en cuanto a que en la Resolución número 106 se equiparó el salario mínimo urbano vigente para la ciudad de San Salvador al rubro del salario mínimo del rubro industria, es de acotar que la Minería como tal no pertenece al rubro del comercio o al rubro de la agricultura, sino al rubro de la industria, por lo tanto las infracciones a los artículos de la Ley antes referida son sancionadas con salarios mínimos de este rubro.

- VI. Referente a lo argumentado por el señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA** mediante su Apoderado en el escrito presentado el día veintiuno de septiembre de este año, en el cual contesta la audiencia concedida por auto de las catorce horas con diez minutos del día diecisiete de agosto del mismo año, se pueden hacer las siguientes observaciones: a) Referente a que se ha vulnerado la igualdad procesal pues su mandante nunca fue convocado a la inspección que se realizó como prueba para mejor proveer; es importante señalar que la Dirección de Hidrocarburos y Minas en virtud de las atribuciones establecidas



Ministro de Economía

en artículo 6 de la Ley de Minería letra "i)" que establece que ésta: *"Debe velar por la correcta aplicación de la presente ley y su Reglamento"*, y su artículo 48 que señala que: *"Que cuando la Dirección tuviere conocimiento de que se están realizando actividades mineras que puedan causar daño a las salud o a la vida de las personas, al medio ambiente o a bienes de terceros, sin más trámite ordenará la práctica de las diligencias que estime conveniente..."*, bajo estas premisas se realizó la diligencia de inspección consignada en el Acta la número 0009 previa a emitir la Resolución correspondiente, ello con el fin de corroborar la suspensión de los trabajos de explotación que había sido ordenada, y fue el resultado de la misma el que se utilizó para mejor proveer tal Resolución; en consecuencia, la realización de la inspección no vulneró derechos del Recurrente pues se ejecutó en virtud de las atribuciones que la precitada Ley ha conferido a la Dirección de Hidrocarburos y Minas. **b)** En cuanto a que no existen en la pieza principal informes de la Dirección de Hidrocarburos Minas o del Registro, ni Acta levantada por la Policía Nacional Civil (PNC) que refiera a la continuidad de la aparente extracción ilegal, es necesario mencionar que la Resolución número 106 en el ordinal quinto de su parte resolutive ordenó remitir la Resolución al Ministerio del Medio Ambiente y Recurso Naturales y a la Policía Nacional Civil, División Medio Ambiente de la localidad; sin embargo, la Ley de Minería no establece que los informes que dichas autoridades elaboren tengan que constar en el expediente sancionatorio; en consecuencia, la apertura a pruebas no depende de la incorporación o no de dichos informes al expediente. **c)** Respecto a que la precitada inspección se realizó en un inmueble que no era propiedad de su mandante sino que pertenece a la señora Rosa Amélida Valencia, situado aproximadamente a trescientos metros del inmueble que pertenece al señor **TOBAR MIRANDA**, y por lo tanto tal inspección no fue un medio idóneo que haya permitido recabar insumos para imputar responsabilidad a su poderdante, cabe señalar que en las actas numero 0346 y 0009 consta que se fue inspeccionado el mismo lugar, cuya Dirección: "Novecientos cincuenta metros hacia el norte del kilómetro treinta y nueve de la Carretera CA-8, cantón el Rosario, municipio de Armenia, departamento de Sonsonate" es la misma, por lo tanto, no se puede señalar que la segunda inspección fue realizada en lugar diferente al inspeccionado, cuando aparecen consignada la misma Dirección en ambas actas de inspección; sin embargo, en cuanto a la propiedad del inmueble es de acotar, que solo se contó con el dicho de la persona encargada de la vigilancia de las máquinas que se encontraban en el lugar al momento que los delegados de



Ministro de Economía.

la Dirección de Hidrocarburos y Minas realizaban la inspección, quien manifestó que el dueño del precitado inmueble era el señor **TOBAR MIRANDA** no siendo posible con sólo este elemento tener la certeza de que él es el titular de dicho inmueble y que estaba realizando labores de extracción para atribuir al señor **TOBAR MIRANDA** la responsabilidad del hecho y por consiguiente una sanción.

- VII. Respecto a lo argumentado por el Apoderado del señor **TOBAR MIRANDA** en escrito presentado el día uno de noviembre de este año, en virtud de la apertura a pruebas ordenada en segunda instancia, se pueden hacer las acotaciones siguientes: a) En cuanto a que el Director de Hidrocarburos y Minas falló en el ordinal cuarto de la Resolución 106 que se practicarán inspecciones periódicas a fin de comprobar el incumplimiento a lo dispuesto en ella, al no haber informes de inspección ni actas que atiendan dicho imperativo, faltan de elementos de convicción para ratificar la sanción pecuniaria, es de señalar que dicha orden no fue dada en virtud de ratificar la sanción pecuniaria impuesta, sino con el objeto de: "...comprobar el cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución", es decir que fue emitida para corroborar que no se han continuado los trabajos de explotación de materiales pétreos en el inmueble. b) En cuanto a que el Apoderado del señor **TOBAR MIRANDA** planteó que hubo incongruencia en cuanto a los puntos de georeferencia señalados en el Acta de inspección, auto de inicio de procedimiento y Resolución 106 por el establecimiento de tres coordenadas para un mismo sitio y la presentación como prueba del Informe elaborado por el Ingeniero Hugo Nelson Aparicio Colocho sobre análisis de autos y Acta emitidos por la Dirección de Hidrocarburos y Minas por supuesta extracción de material de tierra blanca (puzolana), junto con mapa de ubicación de puntos, es de acotar que si bien es cierto hubo mención en el auto de inicio del proceso de tres coordenadas para ubicar el lugar donde se realizó la inspección, fue en el Acta de inspección 0346 donde se estableció con claridad las dos coordenadas que marcan el lugar, las mismas que posteriormente se señalaron en la Resolución número 106. En el Informe elaborado por el Ingeniero Aparicio Colocho y presentado como prueba por el Apoderado del señor **TOBAR MIRANDA** se hace referencia a que probablemente existió un error de redacción en el Auto de inicio del proceso, habiéndose querido relacionar dos coordenadas del inmueble; sin embargo, solo se tomó en cuenta en dicho análisis las coordenadas que ubicaban la extracción en otro inmueble que no es propiedad del señor **TOBAR MIRANDA** obviando por completo las coordenadas



Ministerio de Economía.

establecidas en el Acta de Inspección y consignadas en la Resolución número 106, que eran las que establecían con certeza la ubicación del lugar.

- VIII. Que este Ministerio considera que al examinar las pruebas incorporadas al proceso, no se logró corroborar la identidad de la persona denominada "Juan Antonio", quien fue el que brindó información sobre quién estaba realizando labores de explotación en la ubicación: "Novecientos cincuenta metros hacia el norte del kilómetro treinta y nueve de la Carretera CA-8, cantón el Rosario, municipio de Armenia, departamento de Sonsonate", pues no consta que haya exhibido su Documento Único de Identidad; además, no se determinó su vínculo laboral con el señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA**, pues no mostró algún documento que acreditara tal vínculo, por lo que únicamente se contó con el dicho de esta persona al momento de establecer la responsabilidad del señor **TOBAR MIRANDA** en la comisión de la infracción. En consecuencia, al no lograr establecerse que la persona estuviera laborando por órdenes del señor **TOBAR MIRANDA** en el lugar en que encontraron realizando labores de explotación, no resulta posible atribuir con certeza absoluta a este último la responsabilidad del hecho, y por consiguiente una sanción, debiendo absolver de responsabilidad al Administrado, pues no existen elementos para tener por establecida con certeza su participación en la explotación de material pétreo.

POR TANTO:

De acuerdo a las consideraciones anteriores, razones expuestas, disposiciones legales citadas, teniendo como fundamento lo establecido en los artículos 12 y 14 de la Constitución de la República, 140 en relación al artículo 83 ambos del Código Procesal Penal, y el artículo 70 de la Ley de Minería, este Ministerio,

RESUELVE:

- 1) **HA LUGAR** al Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **MARCIAL ANTONIO PINEDA ZAMORA**, en su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA**, en contra de la Resolución número **CIENTO SEIS**, emitida a las catorce horas y treinta minutos del día trece de abril de este año, por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de éste Ministerio, mediante la cual condenó al señor **TOBAR MIRANDA** a una multa de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,660.00)**, por haber cometido la infracción grave





Ministro de Economía.

regulada en el artículo 16 de la Ley de Minería y sancionada en el artículo 69 de la misma Ley, consistente en: "Realizar las actividades mineras a que se refiere esta Ley, sin la correspondiente autorización".

- 2) REVÓCASE la Resolución antes mencionada y en consecuencia **ABSUÉLVASE** al señor **FRANCISCO TOBAR MIRANDA**, por no existir certeza absoluta en relación a su responsabilidad en el cometimiento de la infracción ya mencionada.
- 3) **DEVUÉLVANSE** las diligencias a su lugar de origen, para los efectos legales consiguientes.

NOTIFÍQUESE.



THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMÁN.
MINISTRO DE ECONOMÍA.

